



EL ESCARAMUJO No. 68

LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN CHIAPAS: NUEVA APUESTA POR INSERTAR REDD+ EN LOS TERRITORIOS

PARTE II

(VER PARTE I AQUÍ)

Autores: David Tobasura Morales y Claudia Ramos Guillén
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México - Julio 2017
http://otrosmundoschiapas.org/

Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+)[1]. El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes[2], a los pequeños agricultores y la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la

---

[1] Comunicado de organizaciones sociales y ambientalistas en el marco de la COP 20, Lima 2014 llamando a rechazar REDD+ en los territorios: http://www.otrosmundoschiapas.org/docs/llamado_cop20_lima.pdf

[2] Una investigación reciente de Ravikumar et al. (2016) sobre el uso de SIG en el Perú ha alertado sobre el sesgo de los análisis que relacionan la agricultura de subsistencia con la deforestación y degradación en la amazonia.

deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los "bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación." (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superficie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que definen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográfica que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades "climáticamente responsables" para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o "climáticamente inteligente". Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecnificación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como

medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector financiero[3].

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identifican a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certificación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.

Despojo, vigilancia y control: reviviendo el fantasma del acaparamiento verde

El 2 de junio de 2017, cerca de 450 personas de la comunidad Laguna Larga en el Petén, Guatemala, fueron desplazadas por la presión de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) bajo el pretexto de asegurar la conservación de la Reserva de la Biósfera Maya. Ante la persecución militar, las familias tuvieron que huir a la línea fronteriza con México, muy cerca de Chiapas, bajo el asedio de las autoridades migratorias mexicanas, y guatemaltecas y en condiciones de emergencia humanitaria[4]. Esta situación pone de relieve la existencia de procesos de acaparamiento y despojo por motivaciones ambientales y con intereses económicos ocultos.

Si bien en México la experiencia reciente sobre proyectos ligados a REDD+ u otras iniciativas ambientales no ha estado relacionada de manera directa a grandes procesos de acaparamiento y/o desplazamiento, el caso de Laguna Larga, por su proximidad geográfica y semejanza con casos como el de las comunidades asentadas dentro o cerca de las reservas de Montes Azules, la Frailescana y la Sepultura en Chiapas, refuerza la desconfianza y el riesgo sobre las acciones desplegadas en estas zonas por iniciativas como la IRE.

En este sentido es importante indagar por la atención que tienen las comunidades “irregulares” en los Programas de Inversión y los mecanismos de monitoreo y vigilancia que serán desplegados o reforzados en las áreas de acción. En el caso de las comunidades asentadas en reservas federales y estatales que son desconocidas por el gobierno, es importante remontarse a la experiencia de 2010, con el memorando de entendimiento de California-Acre-Chiapas, que dio paso a la implementación del piloto REDD+ (no reconocido como tal) en la selva Lacandona.

---

[3] Ver: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/10/La-gran-ruleta-REDD.pdf

[4] Misión de observación desplazados Laguna Larga: http://www.la72.org/wp-content/uploads/2017/06/Misi%C3%B3n-de-observacion-Laguna-Larga.pdf

Durante la corta implementación del programa, se agudizó el conflicto que mantienen comunidades asentadas en Montes Azules y la "brecha Lacandona" con el Estado, como denunció el movimiento REDDeldía de los Montes Azules; conflicto que ha terminado en varias ocasiones en desplazamientos, asesinatos y criminalización de comuneros.

Actualmente, las comunidades siguen siendo desconocidas por el gobierno y, ante esta situación, en el Programa de Inversión de la Selva Lacandona son identificadas como "asentamientos irregulares". Frente a estas comunidades, las llamadas "nacionaleras" que habitan en la región Frailesca y otras que no son mencionadas, los Programas de Inversión las excluyen de cualquier beneficio y programa que vaya a ser implementado. Tan solo en el caso de la Frailesca, se plantea la creación de una mesa de gestión y regularización a cargo de la Procuraduría Agraria. Si bien parece que la IRE opta por la indiferencia frente a las comunidades "irregulares", la intención de reforzar la presencia de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales de Chiapas (FEPADA) en las cuatro regiones IRE-Chiapas mantiene latente el riesgo de sanciones, criminalización y despojo de comuneros y propietarios, bajo el pretexto de luchar contra la deforestación y degradación.

Vale señalar como la PROFEPA históricamente ha sido indulgente con las grandes industrias extractivas legales e ilegales, mientras persigue a empresas y comunidades forestales que incluso han tenido apoyo de entidades gubernamentales[5]. A estas posibles amenazas se sumaría el anunciado despliegue de la gendarmería ambiental en la selva Lacandona, denunciado por las comunidades que viven en la región por ser parte de una estrategia de destrucción comunitaria y cultural, así como de violación de los derechos humanos que facilita la entrada de las industrias extractivas y agroindustriales y conservacionistas en las zonas.

¿Qué pasa con el modelo extractivo?

Los megaproyectos extractivos y energéticos son un factor poco tenido en cuenta dentro de la IRE en general y en Chiapas solo es mencionado por el Programa de Inversión de la región Frailesca. Sin embargo, es importante señalar que en los municipios de Ocosingo y Ostuacán, que son parte de la región Lacandona y Zoque-Mezcalapa respectivamente, existen campos y pozos de hidrocarburos en cerca de 34,820 has. Estos proyectos, además de generar un gran impacto ambiental y de emisiones de gases de efecto invernadero, también están ligados a conflictos territoriales como el que actualmente se ha suscitado en la zona Zoque de Chiapas por cuenta de las concesiones de exploración de hidrocarburos en aproximadamente 84,500 ha de tierras en nueve municipios.

A los hidrocarburos se suma la ampliación y construcción de grandes y pequeñas presas hidroeléctricas que cubren las cuencas hídricas de Mezcalapa, La Venta, Encajonado, Cintalapa, Suchiapa, San Pedro, Santo Domingo y Soyatenco, que pasan por municipios de las áreas de intervención Zoque-Mezcalapa, Frailesca e Istmo-Costa. La construcción de presas en Chiapas es parte de un boom latinoamericano que las ha catapultado como una

[5] Ver: http://aristeguinoticias.com/1606/mexico/profepa-se-ensana-con-las-comunidades-forestales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AristeguiNoticias+(Aristegui+Noticias)

fuente limpia de producción energética[6]. Sin embargo, estudios han mostrado cómo las represas en regiones tropicales emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, principalmente de metano por cuenta de la inundación y descomposición de materia orgánica (Fearnside y Pueyo, 2012). A esto se suma el impacto en la calidad y salubridad de las aguas, degradación de ecosistemas acuáticos, impactos en la biodiversidad y en el caso de las mega-represas, efectos sísmicos regionales.

En materia social, la construcción de presas conlleva en la mayoría de casos al desplazamiento de comunidades, la afectación a la pesca, el riesgo de desastres naturales, entre otros. Ante estas amenazas, ha surgido, por ejemplo, un movimiento regional en la zona Costera y Sierra Madre Sur de Chiapas en contra de presas y minería, con el apoyo del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Ante el contexto de avance de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura, con impactos importantes en las dinámicas de deforestación y degradación, así como en la emisión de gases de efecto invernadero, la IRE no plantea ninguna alternativa o estrategia de regulación, control ni mitigación. De esta forma, se refuerza el argumento de que este tipo de iniciativas, al desconocer el impacto del mercado y la industria extractiva, tendrá un impacto ambiental positivo muy limitado y, por el contrario, muchos impactos sociales, económicos y ambientales negativos a nivel local, contribuyendo al escalamiento de los conflictos territoriales.

Plantaciones comerciales: promocionando la deforestación y degradación

Para finalizar, es importante indagar por el papel de las plantaciones forestales, frutales y de biocombustibles dentro de la IRE. En Chiapas, específicamente en las áreas de intervención, son cuatro los grandes cultivos que por su dinámica de expansión suponen un gran reto a la hora de plantear estrategias de control a la deforestación y degradación forestal: los monocultivos de mango, plátano, especies maderables como el hule, y la palma aceitera o africana. Sobre esta última recae una discusión global respecto a sus desastrosos impactos ambientales y sociales en países tropicales, pese a que se promociona como un cultivo rentable para las comunidades por los múltiples mercados que genera, entre ellos el de los “biocombustibles”.[7]

Las plantaciones de palma se distribuyen en el caso de la región Selva Lacandona por los municipios de Benemérito de las Américas (con aproximadamente 7,969 ha), Marqués de Comillas (2,695 ha) y Ocosingo. Asimismo, en la región Istmo-Costa hay plantaciones en Pijijiapan (2,000 ha aprox.) y Mapastepec (cerca de 10,000 ha). El panorama puede llegar a ser más desolador si se tiene en cuenta que la meta es de 1 millón de hectáreas para el cultivo de palma en el Estado.

---

[6] Ver: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/23/por-que-la-obsesion-de-latinoamerica-por-las-represas

[7] El mercado de biocombustibles para palma presenta una caída gigante ya que después de su despegue en 2007, el mercado al menos en México se sigue direccionando al de aceite para productos comestibles.

El Programa de Inversión de la región Lacandona determina que las plantaciones de palma no podrán funcionar de ninguna forma como conectores biológicos (CONAFOR, 2016a: 41). Sin embargo, no sienta una posición respecto a si puede ser reconocida como una fuente "alternativa" de captura de carbono. Asimismo, si bien las plantaciones de palma se identifican como una de las causas directas de deforestación y degradación en la Lacandona y la zona costera, las actividades propuestas por la IRE - estudios de ordenamiento del cultivo y certificaciones de sostenibilidad - no solo se quedan cortas ante la dinámica de expansión que promueven actores gubernamentales e industriales, sino que podría terminar sirviendo como estrategias de "lavado verde" (Greenwashing).

Al problema de la palma, se debe sumar la expansión de los monocultivos de mango, plátano y especies maderables presentes en las cuatro regiones de la IRE-Chiapas. Aunque éstos no son percibidos como grandes problemas, pese a que su superficie incluso es mayor que la alcanzada por la palma africana, suponen grandes impactos ambientales por cuenta del sistema de producción, el uso de agrotóxicos, la presión sobre bosques y selvas, así como la afectación en la seguridad alimentaria por la conversión productiva.

Desde las comunidades

Es importante reconocer que las comunidades campesinas e indígenas conviven con los bienes comunes naturales, incluyendo no solo al bosque, sino al agua, la biodiversidad y la integralidad de los ecosistemas. Por lo mismo, existen un sinnúmero de prácticas, estrategias de manejo, conservación y protección del bosque, monte o montaña, que se han implementado durante años. Estas estrategias, que han ido pasando a través de generaciones y se han ido enriqueciendo a través del aprendizaje, son producto del conocimiento que las poblaciones han desarrollado en relación con sus propios territorios, de la sabiduría de las poblaciones que han convivido con su medio y el intercambio horizontal de saberes con otros actores; estrategias mediante las cuales se ha enriquecido la biodiversidad a través de sus prácticas, y en su derecho a seguir siendo quienes deciden libremente sobre sus bienes naturales.

Muchos de los proyectos "novedosos" como la IRE, desarrollan la idea de combate a la pobreza y el cambio climático y se posicionan como única solución frente al cambio climático, esto sin tomar en cuenta a las poblaciones ni su conocimiento del manejo, cuidado y gestión de los bosques. En el mejor de los casos, instrumentalizan estas experiencias comunitarias. Muchos de estos proyectos, como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), fueron traídos de experiencias comunitarias y se intentan extrapolar a casos y contextos distintos, bajo una lógica de mercantilización de la naturaleza.

A través de algunas prácticas que involucran la creatividad y el conocimiento tradicional, se puede lograr la mejora o la recuperación de bosques que conserven la biodiversidad y apoyen la soberanía alimentaria. La regeneración natural por sí sola, dependiendo de las condiciones de paisaje y sin apoyo de las personas, podría producir bosques relativamente pobres en términos de biodiversidad y de su aporte a la soberanía alimentaria. Sin embargo, un bosque restaurado por la familia o la comunidad, puede, al final de un período de 20 o 30 años, llegar a asemejarse, en términos de biodiversidad, a los bosques originales. Estas

prácticas incluyen la promoción de plantaciones agroforestales, bosques comestibles, apicultura, agroecología, sistemas Taungya y policultivos, gestión de los bosques, apuntando a fortalecer los procesos de soberanía alimentaria, que difícilmente encaja en la lógica de mercado, propuesta por los Programas de Inversión de la IRE.

Referencias

Alianza México-REDD+. 2016. Iniciativa de Reducción de Emisiones, Programa de Inversión Región Frailesca, Chiapas. México. Disponible en: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6969IRE%20Programa%20de%20Inversion%20Fraylesca.pdf

Castellanos, A., Vargas, A., García, R., Morán, L. y Martínez, M. 2016. Iniciativa de Reducción de Emisiones, Programa de Inversión Región Zoque-Mezcalapa, Chiapas. México: CONAFOR. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83749/IRE_Programa_de_Inversion_Zoque-Mezcalapa.pdf

Castro, G. 2012 ¿Cómo va el enREDD+o en Chiapas? El Escaramujo 24, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México. Disponible en: http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo624_enreddo_chiapas.pdf

CONAFOR. 2015. Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+). Guadalajara, México.

CONAFOR. 2016. Documento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, ER Program Mexico.

CONAFOR. 2016a. Iniciativa de Reducción de Emisiones, Programa de Inversión Región Lacandona, Chiapas. México. Disponible en: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6971IRE%20Programa%20de%20Inversion%20Selva%20Lacandona.pdf

CONAFOR. 2016b. Iniciativa de Reducción de Emisiones, Programa de Inversión Región Istmo-Costa, Chiapas. México. Disponible en: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6970IRE%20Programa%20de%20Inversion%20Itsmo-Costa.pdf

Dooley, K., Griffiths, T., Martone, F. y Ozinga, S. 2011. Espejismos, una evaluación crítica del Fondo Cooperativo para el carbono de los bosques. FERN & Programa para los Pueblos de los Bosques.

Fearnside, P. y Pueyo, S. 2012. Greenhouse-gas emissions from tropical dams. Nature Climate Change, 2, pp. 382-384.

Forest Carbon Partnership Facility. 2016. Technical Assessment of final ER-PD Mexico. Disponible en: https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2016/Nov/Technical_Assessment_of_Final_ER-PD_Mexico_20112016%20%28002%29.pdf

Furtado, F. 2017. REDD+ el acuerdo California–Acre–Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión. Amigos de la Tierra Internacional.

Haenn, N. 2006. The changing and enduring ejido: A state and regional examination of Mexico's land tenure counter-reforms. Land Use Policy, 23(2), pp.136–146.

Holmgren, S., 2013. REDD+ in the making: Orders of knowledge in the climate-deforestation nexus. Environmental Science and Policy, 33, pp.369–377.

Johnson, E. (ed). 2013. Recommendations to Conserve Tropical Rainforests, Protect Local Communities and Reduce State-Wide Greenhouse Gas Emissions. Disponible en: http://draft.valorandonaturaleza.org/documents/files/recomendaciones_para_conservar_bosques_tropicales_proteger_comunidades_locales_y_reducir_emisiones_gei_a_nivel_estatal_.pdf

Kill, J. 2015. REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras. World Rainforest Movement, Uruguay. Disponible en: http://wrm.org.uy/es/files/2014/12/REDD-Coleccion_de_conflictos_contradicciones_y_mentiras_expandido.pdf

Muñoz-Piña, C. y Ortega, J. 2016. Informe Nacional REDD+: México, seguimiento al financiamiento para REDD+ Periodo 2009-2014. BMZ.

Navarro-Olmedo, S., Haenn, N., Schmook, B. y Radel, C. 2015. The legacy of Mexico's agrarian counter-reforms: reinforcing social hierarchies in Calakmul, Campeche. Journal of Agrarian Change, pp.3–23.

ONU-REDD. 2011. Estrategia del programa ONU-REDD (2011-2015). Ginebra, Suiza. https://www.iisd.org/pdf/2011/redd_programme_strategy_2011_2015_es.pdf

Simonet G., Agrawal A., Bénédet F., de Perthuis C., Haggard D., Jansen N., Karsenty A., Liang W., Newton P., Sales A-M, Schaap B., Seyller C. 2016. ID-RECCO, International Database on REDD+ projects, linking Economic, Carbon and Communities data. version 2.0. http://www.reddprojectsdatabase.org

Sosa-Rodríguez, F. 2015. Política del cambio climático en México: avances, obstáculos y retos. Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía.

U'yo'olche A.C, 2010. Much Kanan Ka'aax, Carbon Offset Project. Edinburgh.

WRM y GRAIN, 2015. Los proyectos REDD+ y como debilitan a la agricultura campesina y a las soluciones reales para enfrentar el cambio climático. Barcelona: GRAIN.